



Pancarta colocada por los trabajadores de ENASA en la fachada de la Factoría de San Andrés, Barcelona.

Los trabajadores contra la violencia

EN el plazo de cinco días, el conjunto del movimiento obrero ha sido sometido, como todo el país, a una dura prueba. La reacción de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (CC. OO., USO, UGT) comprendida y seguida masivamente por los trabajadores ha sido, en el sentir de la opinión pública y de las fuerzas políticas, uno de los elementos que más han contribuido a clarificar la situación e impedir la caída en la provocación ultra. La COS, en su primer comunicado del día 25, después de conocerse los trágicos acontecimientos del domingo y el lunes, señalaba públicamente que "forman parte de un complot que busca hacer inviable el proceso democrático en curso" con provocaciones, en este caso, a los trabajadores, al pueblo y a las Fuerzas Armadas. Esta idea del complot, de una auténtica conspiración programada y calculada por los enemigos de la democracia, es la interpretación que se irá imponiendo en los días sucesivos hasta convertirse en tesis aceptada por todos. Por eso mismo la COS, sacando las consecuencias oportunas, pide al Gobierno que tome urgentes medidas para desarticular estas bandas fascistas, pues "la lentitud e indecisión, como ha venido ocurriendo hasta ahora, sería una actitud suicida de incalculables consecuencias". Posiblemente, por primera vez, las organizaciones obreras de la oposición, conscientes quizá de que ellas mismas no pueden ni es su función realizar esta urgente tarea, advierten al Gobierno de que cualquier medida encaminada a erradicar el crimen ultra "contará, sin lugar a dudas, con el apoyo de los trabajadores y de la COS".

No obstante, los sindicalistas parecen advertir en esas horas críticas que solamente una amplia movilización de los trabajadores y de la sociedad puede impulsar a que se tomen dichas medidas y supondría, igualmente, una contribución a frenar lo que ya es una cadena de provocaciones. Llaman, pues, a realizar paros generalizados de duelo y de protesta en las empresas "evitando en estos momen-

tos la acción en la calle". Esta última resolución en boca de organizaciones que han llamado múltiples veces a los trabajadores a manifestaciones, aún sin estar autorizadas, es prueba de la madurez y la capacidad de cálculo político de las centrales sindicales. Debía lograrse, en su opinión, un paro masivo pero evitando a toda costa las provocaciones que agravasen la situación. Al día siguiente un diario como el "Ya" anunciaba en gruesos titulares: "Más de doscientos mil parados en Madrid" —"los trabajadores respondieron con serenidad y disciplina a la convocatoria de la COS". Efectivamente, a lo ancho y lo largo de la geografía del país, la cantidad de trabajadores participantes en los paros había sido similar a la acción del 12 de noviembre y ni un sólo incidente se había registrado. En Euskadi y Cataluña, donde la acción, en el caso de esta última, se desarrolló un día después, la tónica había sido la misma. Las sindicatos catalanas, en un alarde de control, habían recomendado a los trabajadores de Agua, Gas, Electricidad y Sanidad que participasen de forma "que permitan el mantenimiento de estos servicios" y a los del transporte que realizasen los paros de diez de la mañana a cinco de la tarde "con el objeto de facilitar a los trabajadores el traslado de sus casas a los centros de trabajo y viceversa". A nadie se le escapó, por otra parte, que una mayoría de los asistentes al multitudinario entierro de los abogados laboristas de la calle Atocha —ejemplo impresionante de fuerza y de civismo— procedía del cinturón industrial de Madrid, donde en asambleas masivas se había decidido la asistencia al sepelio.

No es, pues, extraño que, al día siguiente, los dirigentes sindicales, en rueda de prensa conjunta, valoraran este comportamiento y aquella participación, aunque sin hacer muchas ilusiones sobre la posibilidad de que no se repitieran nuevos atentados de extrema gravedad. En este sentido, y como uno de los puntos fundamentales de su comunicado, consideraban premonitoriamente "que el conjunto de los trabajadores deben permanecer alerta

para poder reaccionar en todo momento frente a las provocaciones que puedan producirse". Aun reconociendo ante la prensa que aparecían algunos elementos positivos en la declaración del Gobierno posterior al Consejo de Ministros extraordinario del 26, las CC. OO., UGT y USO no ocultaban su preocupación y desacuerdo ante las medidas de prohibición de manifestaciones pacíficas y actos públicos a la oposición sindical y política, pues el ejercicio de esos derechos "son imprescindibles para avanzar en el proceso democrático en el país". Para ciertos sectores de opinión podían estar justificadas estas medidas coyunturales dada la gravedad de la situación, pero para las centrales sindicales, como expresaron claramente, era un contrasentido pretender combatir la provocación y el crimen impidiendo la participación democrática de sectores cuya movilización era considerada imprescindible precisamente para frenar ese complot contra la paz y la libertad.

Poco tiempo pasó para que se confirmara que los temores de los dirigentes sindicales no carecían de fundamento. Sólo pocas horas después de estas declaraciones, en la mañana del 28, dos policías armadas y un guardia civil caían asesinados en las calles de Madrid, produciéndose una nueva reunión urgente de la COS. Para el movimiento obrero organizado, estas nuevas víctimas, como las anteriores, eran la consecuencia de un mismo plan, ante las que había que reaccionar con la misma energía y repulsa. Así, pues, y quizá por primera vez en la historia reciente de las organizaciones obreras, aún no legales, que tan duramente han sido reprimidas en estos años, convocaban a los trabajadores a expresar su condena y protesta "por los últimos asesinatos de policías y guardias civiles" en el mismo sentido que en sus llamamientos del 25 y 27 y "haciendo especial hincapié para que no se establezca ningún tipo de discriminación ante las víctimas inocentes del mismo complot contra la libertad y la democracia". No parece, pues, cierta la opinión de un diario nacional en el

sentido de que mientras la COS había apelado a la movilización contra el asesinato de los abogados u obreros, se limitaba a condenar los hechos en el caso de los policías. Si los paros, minutos de silencio o asambleas del día 28 no alcanzaron el volumen que las del 26, no parece que se haya debido a una carencia de convocatoria por parte de las sindicales, sino porque los trabajadores y sus organizaciones eran conscientes de que ante la repetición de estos crímenes era imposible y hasta peligroso plantear cada vez una paralización de la producción y era necesario pensar en otro tipo de acciones. Mas la COS no se limitaba a propiciar una movilización de protesta y duelo ante los policías caídos, sino que insistía en la necesidad de que se tomaran, urgentemente, medidas eficaces contra la escalada terrorista y apuntaba a que "acelerar el proceso negociador capaz de instaurar la democracia y normalizar la convivencia pacífica" era fundamental en estos momentos. El Gobierno, por su parte, no parece haber captado la importancia de la posición adoptada por las centrales sindicales democráticas. En su reunión del día 28 toma medidas de excepción ya conocidas —suspensión de ciertos artículos del Fuero de los españoles— que facilitan las detenciones y registros. Medidas que en su aplicación han llevado a las organizaciones sindicales a manifestar su enérgica protesta, al comprobar que por lo menos en lo hasta ahora conocido, van dirigidas principalmente contra militantes de izquierda que nada tienen que ver con las acciones terroristas de los últimos días. Mientras exponentes conocidos de la ultraderecha actuaban libremente, miembros de partidos y organizaciones sindicales son detenidos, llamados a declarar a las diferentes comisarías del país. La gravedad de estos hechos no se puede ocultar, pues en un momento en que desde los más variados ángulos de opinión se está exigiendo la unidad contra el crimen y la aceleración del proceso democrático, desviar los tiros de esta manera puede poner en peligro la unanimidad conseguida y la propia negociación Gobierno-oposición, tan importante en estos momentos y tan difícilmente conseguida. Es lógico que aparezca como un contrasentido que mientras todas las fuerzas, sin excepción, figuren o no en determinados documentos de la oposición, condenan estos hechos, publiquen, por ejemplo, esquelas en los periódicos en homenaje a obreros, abogados, estudiantes o policías, en la columna de al lado de esos mismos diarios salgan noticias de detenciones de esas mismas organizaciones, en unos casos políticas en otras sindicales. No hay duda de que sería peligrosísima que cundiera, entre los trabajadores y sus organizaciones más representativas, el clima de que el Gobierno estuviese intentando aprovechar el clamor general contra la barbarie, precisamente para reprimir a los que se oponen a ella. Se trataría de una política errónea cuyas consecuencias se podrían volver contra los que la propician. ■ N. S.